

Más vale tarde que nunca

Cinco meses de gobierno

Centro Gumilla

Al cumplirse los primeros cinco meses de su segundo gobierno, Rafael Caldera cuenta con la aceptación de las tres cuartas partes de los venezolanos encuestados. Las medidas económicas anunciadas el 27 de junio —control de cambio y régimen de precios controlados— y la política social expuesta el 11 de julio, con la ayuda de Romario y Beбето, han logrado valorizar el principal activo político del actual Gobierno: la figura del Presidente Caldera. Al mismo tiempo el bolívar ha sufrido la más grande devaluación de su historia, el PIB se ha reducido en un 5% en el primer trimestre del año, la tensión social inunda el ambiente...

Estos cinco meses han sido de pelea. Mientras Caldera inicia su Gobierno llamando a la solidaridad patriótica para enfrentar los dos grandes focos de emergencia —el déficit fiscal y la crisis bancaria— y gruesos problemas estructurales —el rentismo del sector privado, el bajo rendimiento del Estado y la escasa articulación de la sociedad civil— importantes agentes económicos privados utilizan la ocasión para “hacer su agosto”, mientras en la población los efectos del deterioro creciente aumentan la tensión social.

EL “CALDERAZO” DEL 27 DE JUNIO

La intervención del Banco Latino unos días antes del inicio del nuevo gobierno destapa la olla. El Estado acude en auxilio del sistema financiero asumiendo la enorme responsabilidad de garantizar los depósitos bancarios a cualquier costo sin limitar la libertad del mercado monetario. Aflora una contradicción que golpea a la gente: mientras se viene diciendo que el déficit fiscal obliga a reducir los programas sociales, aumentar las tarifas de los servicios públicos, congelar los salarios, retrasar obras públicas importan-

tes..., se destina casi el doble del déficit fiscal calculado a “sanear” el sistema bancario. Por otra parte, no se sanciona efectivamente a los responsables de una situación financiera debida a impericia administrativa, aprovechamiento ilícito de la actividad bancaria para negocios propios de sus administradores o propietarios y a deficiente supervisión del Estado.

Los cuantiosos auxilios financieros no logran ni salvar los bancos ni devolver la confianza en el proceso de estabilización económica. Al contrario, se cometen nuevos abusos con los recursos públicos que tampoco son sancionados y el Gobierno no tiene más recurso que intervenir otros ocho bancos, mientras intenta tapar la situación crítica de algunos más y evitar que reviente públicamente la quiebra de una buena parte de las empresas de seguros, cuyos administradores no pueden cumplir con los compromisos adquiridos con sus clientes.

Mientras tanto, operadores monetarios se convierten en mortíferos especuladores en el mercado de divisas. El ambiente de desconfianza y la masa de recursos inorgánicos generados por el Estado para evitar el colapso bancario disparan la devaluación. Se paralizan las inversiones tanto productivas como comerciales porque los únicos negocios seguros y rentables son comprar dólares y bonos cero cupón, ambos sumamente costosos para el Estado que debe sacrificar cuatro mil millones de dólares de sus reservas y tiene represados más de quinientos mil millones de bolívares en bonos cero cupón que generan rendimientos de más del setenta por ciento a sus poseedores.

El resultado es una situación monetaria insostenible que, además, genera la sensación de ausencia de gobierno porque no puede detener la especulación financiera, ni la comercial, ni sancionar a sus responsables, además de mostrar marchas y contramarchas en sus propuestas

y medidas para enfrentar la situación. La gente se siente agredida por el sector privado especulador y desprotegida por un Gobierno perplejo, complaciente para con los grandes.

Cuando se anuncian [27 de junio de 1994] la suspensión de las garantías junto con las medidas de control de cambios y régimen parcial de precios controlados, bono de alimentación y transporte a los que ganan menos de tres salarios mínimos, la mayoría de la población la percibe como una toma de posición del Presidente Caldera a favor de ella y en contra del sector privado especulador. Se pretende, además de frenar la desestabilización política, recuperar el nivel de reservas en divisas, ponerle fin al desaguadero de los auxilios financieros a los bancos, controlar el mercado de divisas, detener la especulación y lograr el respiro suficiente para decidir y arrancar un programa de estabilización macroeconómica y el ajuste estructural de la economía venezolana.

Mientras tanto el gobierno central luce desarticulado, sin un norte claro, obligado a improvisar ante una situación que parece fuera de control. La coordinación entre el gobierno central, las gobernaciones estatales y los Municipios todavía no es fluida. Al igual las relaciones entre los Poderes Públicos. Menos aún la relación entre instituciones claves en la coyuntura actual: Gobierno y Banco Central de Venezuela, FOGADE, Superintendencia de Bancos. Las protestas, paros, acciones de presión de estudiantes, gremios, transportistas. Las garantías constitucionales —económicas y políticas— han sido suspendidas como condición de posibilidad para poder “gobernar”, es decir, decretar las medidas económicas, detener la ola de rumores, disponer de los instrumentos para disuadir intentos desestabilizadores... La situación política no se caracteriza por su estabilidad. Hay oídos sordos a las propuestas de búsqueda de acuerdos políticos... Ha aumentado la represión.

La situación social no es menos angustiante. Los niveles de pobreza han seguido creciendo, la violencia campea en todo el país y asume mayor variedad de manifestaciones, la tendencia a la disgregación social y la búsqueda de soluciones individualistas crece, al igual que se multiplica el comportamiento anómico en todos los estratos sociales.

Las medidas anunciadas producirán

algunos efectos indeseables, agudizados por la increíble torpeza con la que han sido puestas en práctica (más de quince días suspendida la compra-venta de divisas, porque no se sabía cómo se estructuraría el control de cambios anunciado) que se justifican por las consecuencias previsibles del camino que se traía. En el ámbito económico se retrasará cualquier decisión de inversión privada en Venezuela, especialmente la extranjera; se reducirán las exportaciones; se corre el riesgo del incremento de la especulación y la corrupción en el mercado cambiario, retraso en los procesos de apertura internacional. En lo político surgen los abusos derivados de la suspensión de garantías.

Todos estos factores conviven en una percepción de la realidad que se mueve entre la resignación, el desasosiego, la incertidumbre y la confianza en que la experiencia, visión, honestidad y compromiso de Rafael Caldera podrán revertir el proceso de deterioro. La popularidad del Presidente se sustenta en que una mayoría de los venezolanos le sigue dando más peso al factor "fe" en el futuro y en las manos que hoy tienen la responsabilidad de la República que a los datos de la realidad presente.

LA TENTACION CESARISTA

La fe popular en Caldera se convierte en ocasión para la tentación cesarista. Se percibe a un Presidente que no escucha ni dialoga, a veces ni con sus colaboradores cercanos. Da la impresión de tener las decisiones previamente tomadas y sólo espera el momento oportuno.

Algunos datos dan pie para pensar que el cuadro actual puede convertirse en una especie de "dictadura constitucional". Existen insistentes presiones para que se decida a salvar al país y su democracia por vías o procedimientos antidemocráticos, por paradójico que esto parezca. En los escenarios escogidos por Caldera para anunciar sus medidas prevalece la simbología militar y el lenguaje republicano que parecen enviar el mensaje de su disposición a asumir el control total del

poder, apoyado en las Fuerzas Armadas, disolviendo el Congreso, neutralizando otras instituciones con relativa autonomía, para que la República "no se pierda en sus manos".

Caldera no caerá en la tentación cesarista en la medida en que al mismo tiempo que ponga en práctica el mandato que recibió de los electores, respete la opinión expresada por esos mismos electores en



la conformación del Congreso de la República, la elección de Gobernadores, Asambleas Legislativas, Alcaldes y Concejos Municipales. Una "radicalización" que lleve al Presidente a asumir, por decisión propia y el apoyo de las Fuerzas Armadas, poderes especiales, disolver los otros poderes públicos y convertirse en un Dictador, aunque sea para convocar una Asamblea Constituyente, además de romper con el pensamiento y la actuación histórica del propio Caldera, sería seguir los intereses de una trasnochada "ultraizquierda" o de una muy asustada derecha liberal, según la ocasión en la que se produzca ese "golpe de timón".

LOS AUTORITARISMOS AL ACECHO

El agotamiento o fracaso del Gobierno de Caldera podría derivar en alguna de estas opciones indeseables: un levantamiento popular o un golpe militar. El agotamiento de la paciencia de la población por el deterioro cotidiano de sus condiciones de vida, la ausencia de un futuro mejor como producto de los sacrificios presentes y la pérdida de fe en las posibilidades de que Caldera lidere una alternativa a lo que se vive puede provocar una muy violenta explosión social o un estado de agitación generalizada en todo el país.

Entre los venezolanos ha crecido el miedo a una explosión social. Dos elementos inciden en ese miedo: la experiencia de las consecuencias del 27 de febrero del 89 y la sensación generalizada de que esto iba a pasar. Después del 27 de febrero vastos sectores de la población vivieron una horrible experiencia de represión desproporcionada, además de las angustias por el desabastecimiento, carencias en los servicios básicos... Por otra parte, la chispa de la explosión social fue la frustración colectiva por la conciencia generalizada de que las expectativas de futuro largamente acariciadas no se harían nunca realidad. De 1989 a esta parte esas expectativas ya no son las mismas. El deterioro de las condiciones de vida no es ya una sorpresa

inesperada.

Las tendencias anómicas en el seno de la sociedad venezolana y el aumento de la violencia social cotidiana conduce a un tipo de "levantamiento" popular distinto a la explosión social. Se expresa a través de una "agitación generalizada", con manifestaciones que van desde el aumento de las protestas organizadas y espontáneas de estudiantes, vecinos, empleados hasta acciones intempestivas de saqueos o desórdenes como los sucedidos en diversas zonas del país (Turén, Morón, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Caracas...). En un momento dado esta "agitación generalizada" puede hacerse incontrolable, exigir medidas represivas, la salida de las Fuerzas Armadas a la calle a intentar guar-

dar o restaurar el "orden público". Momento que puede ser aprovechado por figuras populares y organizaciones políticas para intentar la insurgencia popular.

Casi todos los análisis coinciden en señalar que el 27 de febrero de 1989 no pasó a mayores por la inexistencia de algún líder o grupo capaz de capitalizar el estallido social y dirigirlo con objetivos claros. Después del 4 de febrero de 1992, dos cosas quedan claras. La primera, que las Fuerzas Armadas no son una estructura monolítica que responde a sus mandos naturales, sino que en su seno existen grupos —"logias", las llamó el General Fernando Ochoa Antich— organizados, ideológicamente homogéneos, capaces de actuar con autonomía. Y, la segunda, que la figura representativa del mayor de esos grupos, el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, Comandante Hugo Chávez Frías, es un punto de referencia —mítico quizás, pero real— para miles de venezolanos, militares y civiles.

La política de pacificación del Presidente Caldera ha puesto en la calle a los insurgentes de los intentos de golpe de Estado de 1992. Los del MBR-200 se han dedicado a ampliar su organización. Nació como un grupo estrictamente militar, ahora está creando su base civil. Si el Gobierno Caldera se estabiliza y el MBR-200 tiene que luchar en la contienda electoral "normal", seguramente se convertirá en la expresión de un grupo de la sociedad con una cierta fuerza en alguna Alcaldía, Concejo Municipal o algún diputado en el Congreso Nacional, quedando así "neutralizado" por la fortaleza misma del sistema. Este debe ser el objetivo del Presidente Caldera, al igual que logró que el Comandante Chávez asistiera, sin uniforme, como uno más de sus invitados al desfile militar del 5 de Julio en Los Próceres, impidiendo que se convirtiera en una figura alternativa. Sin embargo, en caso de una situación de "agitación generalizada", la figura del Comandante Chávez y la organización militar y civil del MBR-200 pueden convertirse en la figura catalizadora de un estallido social. Un llamado de esta figura a que los militares no repriman a sus conciudadanos puede dividir a las Fuerzas Armadas y dar al traste con los "planes" de restauración del orden. Si al pueblo "agitado" se le invita, con el apoyo de una parte de las FAN, a convertir esa agitación en una "constituyente" de la nueva Venezuela

bólvvar-rodríguez-zamorana... podemos estar ante un levantamiento popular de otra índole.

Esta posibilidad va pareja con su contraria, igualmente indeseable: el golpe militar. Sectores sociales específicos ven en la posibilidad de la "agitación" una amenaza a su propia supervivencia. Los altos mandos de la Fuerzas Armadas, aupados por esos grupos y buscando salvar su propia estabilidad y la "unidad" de la institución militar terminarían por convencerse de que la única manera de evitar un estallido social es asumir el control del país por la vía de un golpe de Estado. De esta manera, se impondría un "orden", incluso con apoyo social, y tendríamos una dictadura militar sin límite de tiempo. La única forma en que ese autoritarismo militar obtendría reconocimiento internacional es mostrando el deterioro interno del país y asumiendo un programa de estabilización y de ajustes económicos estructurales perfectamente "ortodoxo" dentro de los parámetros más estrictos del Fondo Monetario Internacional, cargando los costos sobre los sectores de menores ingresos, el mercado interno deprimido y reprimiendo.

Esta posibilidad hay que contemplarla, también, como consecuencia del levantamiento popular y como modo de evitar que los liderazgos que lo catalicen se asienten en el poder.

VIAJE AL FONDO DEL MAR

También puede suceder que continúe el deterioro progresivo, que la situación se haga peor y peor sin que se produzca ninguna de las situaciones anteriores. Una de las consecuencias de los años de "crisis" que llevamos es la variación de las expectativas de la población. Antes se aspiraba a una mejoría constante de la calidad de vida. La frustración de esas expectativas, que ha estado a la base de reacciones sociales como el 27 de febrero de 1989, el crecimiento de los comportamientos anómicos, los "apoyos" a los intentos de golpes militares de 1992, la satisfacción por el enjuiciamiento de los ex-presidentes Lusinchi y Pérez... ha llevado a una especie de "resignación" ante el deterioro y al convencimiento de que este proceso no ha tocado fondo (si es que tal fondo existe).

Si a esto añadimos la inexistencia de proyectos políticos alternativos con cier-

ta vigencia social y de liderazgos arraigados capaces de generar el impulso colectivo necesario para crearlos y luchar por llevarlos a la práctica, junto con la creciente desintegración social por la cual cada quien se siente más llamado a buscar su propia salida individual que contribuir a la búsqueda de salidas colectivas, puede suceder que el proceso social venezolano se asemeje a una caída suave por un plano inclinado.

Este proceso no es pacífico ni carente de angustias. La sensación de estar continuamente en descenso produce toda clase de angustias y tensiones personales, grupales y colectivas. El deterioro de la calidad de vida y la búsqueda de soluciones individuales genera muchas formas de violencia, de manera que este posible desarrollo del proceso social venezolano tiene consecuencias nefastas para el país y cada uno de sus habitantes.

LA PRUDENCIA DEMOCRÁTICA

También es posible que Caldera contribuya a la preservación de la democracia y a su profundización. Para ello debe manejarse con una "prudencia" tal que logre: rescatar la confianza en la estabilidad social necesaria para el desarrollo económico y la consolidación de una sociedad participativa; acelerar el proceso de adecuar el Estado a las tareas de conducir el futuro; avanzar significativamente en el campo de la justicia social; establecer una comunicación fluida entre el Gobierno, las instituciones y todos los sectores de la vida nacional; y contribuir sustantivamente a sustituir la cultura política del populismo-rentista por una cultura ciudadana, participativa y productiva.

Rescatar la confianza perdida en la estabilidad económica venezolana, cuyos principales indicadores serían la drástica y definitiva reducción de la inflación, la estabilización del tipo de cambio, la superación de la recesión por un crecimiento sostenido de la actividad productiva y comercial de los diversos sectores de la economía nacional. Una condición sin la cual no es posible recuperar la confianza es la existencia de un horizonte y un rumbo claro en materia económica que permita establecer objetivos y unas "reglas de juego" iguales para todos los actores sociales y que sea percibido por todos como tal. Lo más importante no es el contenido de ese programa, sino su exis-

tencia con el mínimo de consenso necesario para su legitimidad y la clara decisión de realizarlo coherentemente a corto y mediano plazo.

Parece que la competencia internacional es mejor camino que el control estatal para tratar de enderezar las actitudes del sector privado y público además de enrumbiar el desarrollo económico. Sin embargo, la poca voluntad demostrada por importantes agentes del sector privado de entrar en una auténtica negociación social, es decir, la situación de guerra abierta en que se han situado grandes grupos económicos y el sector comercial contra el gobierno, amenazando ahora con el desabastecimiento y la completa paralización económica, hacen que los controles y el uso de la fuerza del Estado, dentro de los límites de la Ley, puedan ser convenientes.

Es fácil que las medidas del 27 de junio sean leídas por muchos como un regreso al proteccionismo. Unos lo harán con alegría, lo que supone estancarse y hasta retroceder en nuestra cultura económica. Otros emplearán la expresión para comprobar la vuelta al pasado inviable y atacar desde allí "ideológicamente" al gobierno de Caldera. De allí que el Gobierno debe estar especialmente atento a modificarlas inmediatamente que cesen las causas que las provocaron. De no hacerlo así conseguirá el objetivo contrario: mayor inestabilidad y mayor ingobernabilidad.

El sensor que mida ese proceso debe ser de alta sensibilidad y precisión milimétrica. Dejar pasar el tiempo, por ejemplo esperando tender un puente desde el final del Mundial de Fútbol hasta que el calor electoral del próximo año distraiga los ánimos, es jugar con fuego. La rapidez en la toma de decisiones no ha sido el fuerte de estos cinco meses de gobierno, aunque algunos comentaristas políticos insistan en que si algo sabe Caldera es "medir el momento". Más bien tenemos la impresión contraria, como lo demuestra la torpeza en la puesta en práctica de las medidas económicas que casi estropean el primer impacto positivo logrado.

En todo caso, mucho debe cuidarse el Gobierno de manejar el control de cambios de forma pulcra, evitando cualquier posibilidad de que se levante sospecha alguna (el fantasma de RECADI está como león rugiente, buscando a quien devorar). Igualmente debe evitar seguir

cometiendo errores, como lo ha hecho con los "allanamientos" policiales a personas que parecen tener su origen más en venganzas personales (arreglo de cuentas, se dice cuando se hace entre malandros) que en auténticas investigaciones de inteligencia política o militar, o la detención arbitraria de activistas populares o los mismos dirigentes de la ultra-izquierda que siempre "recogen" en estos casos (la renovación de los ficheros de "seguridad del Estado" y su tecnificación, es recomendable a pesar de la austeridad).

Cómo se maneje el delicado asunto del precio de la gasolina puede ser un importante indicador. Es evidente que hay que subir el precio a niveles que no signifiquen una pérdida para nuestra principal empresa nacional. Poner un litro de gasolina a disposición del consumidor le cuesta a Petróleos de Venezuela once bolívares con cincuenta céntimos (Bs 11,50). El consumidor paga la mitad de su costo y, además, cree que tiene derecho a ello "porque el petróleo es nuestro". ¿Qué propietario consciente remata sus activos a mitad de precio sin necesidad? Más aún, el consumo de gasolina de automóviles privados (es decir, que no hacen servicio público) supera el sesenta por ciento (60%) de la venta de gasolina. Si el esquema impositivo del Estado quiere ser distributivo, tendría que pechar este consumo, de manera de incluso subsidiar el servicio público. Por parte de PDVSA existe la disposición de costear la conversión de vehículos de servicio público al uso del gas a presión como combustible, lo cual reduciría significativamente el costo para todas las partes. Más todavía, el precio de la gasolina es uno de los requisitos para acceder a posibles financiamientos internacionales necesarios para afianzar el programa económico de mediano plazo.

Igualmente depende su aporte a la democracia de un efectivo y creíble —es decir, que de verdad llegue a la gente— conjunto de "auxilios sociales" inmediatos, como parte de una política social de largo aliento. El socorrido slogan que reza "la mejor política social es una buena política económica" es una atractiva falacia en la que no puede caer Rafael Caldera si pretende un mínimo de consistencia con su pensamiento ético y político. La democracia no se reduce a una formalidad electoral ni al funcionamiento aparente de las instituciones. Su fun-

damento es la justicia social, terreno en el cual la sociedad venezolana ha retrocedido velozmente y es una de las causas de la decepción de la mayoría de la población venezolana. A las inmediatas el gobierno de Caldera tiene que hacer ver a la gente que se ocupa más de ellos que de los bancos, y que los recursos del Estado se usan para distribuir mejor las cargas entre los integrantes de la sociedad venezolana.

Al mismo tiempo se requiere una profunda renovación de las relaciones políticas, de la Constitución, leyes y funcionamiento de la sociedad política venezolana. A ello nos referíamos cuando hablabamos de iniciar un acelerado proceso constituyente en Venezuela (cfr. SIC n° 566, junio de 1944). No se trata de maquillar la Constitución de 1961 o aceptar las reformas propuestas por la COPRE para modernizar al Estado. La renovación que se requiere está más cerca de la "revolución" que de la "reforma". Requiere establecer nuevos fundamentos sociales con nuevos sujetos políticos. Una revolución que no requiere de la fuerza de las armas, sino de la capacidad de negociación social de personas, grupos, intereses organizados... capaces de superar la visión individualista, hacerse cargo de la cosa pública, es decir, ciudadanos de la República de Venezuela y establecer las condiciones para formular y realizar un proyecto nacional pluralista, democrático, latinoamericanamente integrado y abierto al mundo.

Finalmente, el punto crucial es la transformación de la cultura política inducida por el populismo-rentista. Si la "popularidad" de Caldera se debe a que responde a las expectativas de esa cultura, hace un flaco servicio a la profundización de la democracia venezolana. En muchos de sus gestos como gobernante se ven rasgos de populismo-rentista. Transformar el fondo cultural requiere de rupturas profundas que exigen de quien las pretende provocar —en este caso del Presidente Caldera, si realmente lo siente así— tanto claridad en lo que debe hacer como valentía para no someterse al aplauso fácil. Aquí también se pone a prueba la condición de líder de Caldera, superando su conocida afición a proclamar principios para convertirlos en decisiones que procuren el cambio de las estructuras venezolanas, incluso en las dimensiones profundas de la cultura política.